



NUE 120-A-2019 (OC)

Mojica Burgos contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas del veintinueve de enero de dos mil veinte.

Descripción del caso:

I. El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por el ciudadano **José Francisco Molina Guzmán**, en adelante “el apelante”, contra la resolución de referencia UAIP/RES/MH-DGII-2019-0087, emitida el siete de mayo de dos mil diecinueve por el oficial de información de la **Dirección General de Impuestos Internos** (en adelante “DGII”) del Ministerio de Hacienda, mediante la cual se denegó el acceso a la información consistente en: *“Informe de procesos de fiscalización o determinación de impuestos, relacionados con impuesto sobre la Renta del ejercicio 2014 que se dejaron sin efecto en virtud del D.L. 127 del 26/09/18, publicado en el D.O. N° 182, Tomo N° 421 fecha 1/10/18. El informe debe contener: a) número de expediente; b) tipo de contribuyente; c) fecha de Resolución en la que se dejó sin efecto el proceso; y d) monto del impuesto complementario no determinado”*.

[Handwritten signatures and initials]

En ese orden, el oficial de información de la **DGII** resolvió que no era posible proporcionar la información solicitada por ser de carácter confidencial, de conformidad a los artículos 6 literal “f” y 24 literal “d” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 50 y 51 del Reglamento de la mencionada ley (RELAIP), en relación con el artículo 28 del Código Tributario (CT), así como en la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda.

Al respecto, el apelante manifestó su inconformidad argumentando que: “si bien es cierto la información es relativa a los procesos de fiscalización de impuesto sobre la renta del ejercicio 2014, en ningún momento y de ninguna forma está pidiendo información propia o personal de los contribuyentes respecto de los cuales se llevó a cabo proceso de fiscalización”. En conclusión, considera que la información requerida es más de orden estadístico y no es información reservada en los términos del Art. 28 del CT pues no está



solicitando ni siquiera nombres de contribuyentes, ni montos declarados o no declarados, ni tampoco información que esté contenida en Registro Contables y que sea sensible para los efectos de ningún contribuyente.

A. El Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada **Daniella Huevo Santos** para instruir el procedimiento. Sin embargo, debido a la finalización de su período de suplencia el día 30 de junio del presente año, el caso fue reasignado a la Comisionada **Olga Noemy Chacón de Hernández**.

En el informe de ley rendido por el ente obligado, se manifestó en lo medular: *i*) que esa Cartera de Estado actúa sometida al principio de legalidad, regulado en el artículo 86 inciso final de la Constitución de la República de El Salvador, en relación con el Art. 3 literal “c” e inciso cuarto del CT, ya que dicho principio se configura como el rector de todos los actos emanados de esa oficina; y, *ii*) que lo peticionado por el apelante a esa Dirección General difiere con lo argumentado en la apelación, debido a que en la apelación incluyen un cuadro de cómo deseaban la información y aclaran que es de índole estadístico; por lo cual, habiéndose realizado esa aclaración, esa oficina hará el esfuerzo de preparar la información requerida conforme a los cuadros especificados en la apelación. Lo anterior, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de esa institución.

B. Finalizada la etapa de instrucción, se realizó la audiencia oral en la fecha y hora señalada con la comparecencia del apelante **José Francisco Molina Guzmán** y los apoderados del ente obligado, licenciados **Diana Carolina Gómez de Cornejo** y **Ernesto Alexander Linares Hidalgo**.

Instalada la audiencia, no hubo ofrecimiento de elementos probatorios por ninguna de las partes; no obstante, la representación del ente obligado expresó que, tal como se expuso en el informe de ley, prepararon un informe mediante el cual pretendían conceder el acceso a la información solicitada, concretamente respecto de los ítems “b”, “c” y “d” (descritos al inicio de la presente resolución); sin embargo, en relación a la información relativa al literal “a” de su solicitud consistente en conocer el número de expediente, se sostuvo la postura al

respecto para no ser entregada. Se le corrió traslado al apelante, quien manifestó que la información estaba incompleta.

Posteriormente, se llevó a cabo la fase de alegatos, los cuales versaron sobre si la información del ítem "a" debía o no ser entregada. En ese sentido, **el apelante** manifestó, en lo medular, lo siguiente: a) que ratifica todos los argumentos planteados en el escrito de apelación; b) que lo único que pretende conocer es cómo fueron resueltos estos casos y cuales fueron favorecidos con la aplicación del decreto en mención; c) que considera debió haber una resolución en donde conste que se aplicó dicho decreto para cada caso; d) que nada de lo que ha solicitado pretende acceder a información de tipo confidencial, pues la misma es de orden estadístico y público; por lo que, en virtud del principio de máxima publicidad, Art. 4 letra "a", pide que se revoque la resolución impugnada y se ordene la entrega de lo solicitado.

Por su parte, **la representación del ente obligado** expuso en lo medular: que según un inventario de clasificación de información que ellos manejan a nivel de la dirección, se establece que los números de expedientes son información confidencial y por ello no pueden brindarlo, por lo que no pueden acceder a entregarla.

Seguidamente, el apelante contra argumentó, que espera un pronunciamiento por parte de este Instituto en el sentido de determinar si la información solicitada es o no confidencial.

Luego, como alegato final, la representación de la DGII, expuso que ratifican los argumentos ya expuestos, en el sentido que solo pueden entregar "b", "c" y "d", pues el número de expediente es un número individual con el cual se podría identificar a los contribuyentes.

Finalmente, escuchados los alegatos de ambas partes, el pleno resolvió: declarar la suspensión del presente procedimiento en la etapa actual, de conformidad al artículo noventa numeral cuatro de la Ley de Procedimientos Administrativos, por un período de quince días hábiles contados a partir del siguiente de este proveído, en donde el ente obligado se comprometió a entregar la información anteriormente relacionada en dicho plazo. El apelante, una vez recibida la información, contaba con un plazo de tres días hábiles para manifestar su conformidad o no con la documentación que le fuera entregada. En ese sentido, de recibir a satisfacción el apelante la información en mención, se delimitaría el objeto de



controversia únicamente al literal “a” de la petición de información, de lo contrario, se continuaría el procedimiento respecto de todos los ítems (a, b, c y d).

En la fase de preguntas aclaratorias formuladas por el pleno, la Comisionada Chacón le solicitó al ente obligado que fundamentara concretamente por qué no puede entregarse el número de expediente, ante lo cual contestaron: que no es posible en virtud del Art. 28 CT, amparados en el secreto fiscal; asimismo, agregaron que ellos poseen un sistema en esa dirección, en el cual ingresando ese número de expediente se accede a toda la información de determinado contribuyente, se maneja de manera interna entre los empleados del Ministerio de Hacienda (MH) y que los únicos que no tienen acceso son los que atienden directamente al público.

Luego, la Comisionada Escobar consultó al ente obligado: que si el señor Molina Guzmán (apelante) podría ingresar al sistema que ellos manejan teniendo el número de expediente, a lo cual, se respondió que el apelante no podría ingresar a dicho sistema porque no es empleado del MH, y solo a ellos se les da el acceso.

Por último, la Comisionada Pérez consultó: ¿existe alguna base de datos pública de acceso a este sistema que ustedes manejan? A lo cual se respondió que “no”, que el sistema es a nivel interno del MH; luego consultó que ¿si en la referencia hay algún dato como número de NIT o nombre que permita identificar al contribuyente más allá de una calificación numérica? a lo cual se respondió que es en sí un código, que no lleva el nombre del contribuyente ni el NIT. Asimismo, indicó que con el muy número de expediente no se logra identificar al contribuyente, sino que hasta que dicho código o número de expediente es ingresado al sistema que manejan a nivel interno en el MH. Posteriormente, le consultó al apelante: ¿es usted empleado del Ministerio de Hacienda? A lo cual él respondió que “no”.

C. Finalmente, el 22 de enero de este año, la DGII le remitió al apelante la información correspondiente a los literales “b”, “c” y “d” de su solicitud de información – vía electrónica, con copia a este Instituto –, cumpliendo el plazo fijado para ello durante la audiencia oral; ante lo cual, el apelante contaba con un plazo de tres días hábiles para informar de manera oportuna a este Instituto su conformidad o no con dicha información; no

obstante lo anterior, el plazo para ello ha fenecido sin que el apelante se haya pronunciado al respecto.

II. En tal sentido, este Instituto ha verificado el contenido de la información que le fue remitida al apelante (según el párrafo que antecede), y se ha podido constatar que efectivamente se ha entregado la información solicitada y que esta es conforme con lo solicitado por **Molina Guzmán** en los literales “b”, “c” y “d” de su solicitud, en virtud del Principio de Congruencia (Art. 218 CPCM), el cual establece en su inciso segundo, que “[e]l juez debe ceñirse a las peticiones formuladas por las partes, con estricta correlación entre lo que se pide y lo que se resuelve. No podrá otorgar más de lo pedido por el actor, menos de lo resistido por el demandado ni cosa distinta a la solicitada por ambas partes”.

Por tanto, se tiene por entregada dicha información y por satisfecho el DAIP del ciudadano; asimismo, tal como se resolvió durante la audiencia oral, corresponde tener por sobreseído el presente procedimiento respecto de esos ítems de conformidad al Art. 98 letra “d” de la LAIP, y **delimitar el objeto de controversia** para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la información pendiente de ser entregada; es decir, la relativa al: *“número de expediente de los procesos de fiscalización o determinación de impuestos, relacionados con impuesto sobre la Renta del ejercicio 2014 que se dejaron sin efecto en virtud del D.L. 127 del 26/09/18, publicado en el D.O. N° 182, Tomo N° 421 fecha 1/10/18”*, respecto de la cual, este Instituto se pronunciará en el siguiente apartado.

Análisis del caso

El asunto medular consiste en determinar si la negativa de entregar la información requerida (delimitada en el párrafo que antecede) ha sido debidamente fundamentada, así como establecer la obligación de entregarla o no. Para resolver la controversia se realizarán las siguientes consideraciones jurídicas del caso: **(I)** Principio de máxima publicidad y sus efectos; y **(II)** Análisis del caso en concreto.

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el Sistema Interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) como la Comisión Interamericana de



Derechos Humanos (CIDH) han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones”².

El Art. 4 letra “a” de la LAIP establece el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la CorteIDH se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al

¹ Corte I.D.H., *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.p

³ CIDH- *Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quienes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

órgano que fue solicitada⁶; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, la cual expresa una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información, y que al respecto señala: “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad”, **que “las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”**, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”⁸.

II. Para el caso en comento, el ente obligado sostuvo su postura en tanto considera que la información relativa al ***“número de expediente de los procesos de fiscalización o determinación de impuestos, relacionados con impuesto sobre la Renta del ejercicio 2014 que se dejaron sin efecto en virtud del D.L. 127 del 26/09/18, publicado en el D.O. N° 182, Tomo N° 421 fecha 1/10/18”***, es información confidencial, de conformidad a los artículos 6 letra “f” y 24 letra “d” de la LAIP y debe resguardarse en virtud el Art. 28 del CT.

A. Al respecto, el Art. 6 letra “f” de la LAIP, define la información confidencial como “aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés jurídicamente protegido”. De igual forma, el Art. 24 letra “d” de la misma ley, señala que es información confidencial: “d. Los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal”.

⁶ Idem

⁷ Idem

⁸ Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp



En complemento de lo anterior, el ente obligado fundamenta su denegatoria en lo dispuesto en el Art. 28 del CT, a saber:

“Reserva de la Información – Artículo 28 – La información respecto de las bases gravables y la determinación de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias y en los demás documentos en poder de la Administración Tributaria, tendrá el carácter de información reservada. Por consiguiente, los empleados y funcionarios que por razón del ejercicio de sus cargos tengan conocimiento de la misma, sólo podrán utilizarla para el control, recaudación, determinación, emisión de traslados, devolución y administración de los tributos, y para efectos de informaciones estadísticas impersonales, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

No obstante lo anterior, la Administración Tributaria podrá proporcionar a las instituciones que desempeñen funciones que constituyan un servicio público, el número de identificación tributaria de sus administrados, que le requieran en cumplimiento de sus atribuciones. La restricción contenida en esta disposición legal no inhibe a la Administración Tributaria de publicar los nombres de contribuyentes deudores, de conformidad a lo establecido en el artículo 277 de este Código.

Aquellas personas o entidades que, sin pertenecer a la Administración Tributaria, en cumplimiento de disposiciones especiales tuvieren acceso a los datos o informaciones a que se hace referencia, deberán guardar absoluta reserva y sólo podrán utilizarlos para efectos del cumplimiento de sus obligaciones. La contravención a la obligación establecida en este artículo, será sancionada de conformidad con las disposiciones legales o contractuales que resulten aplicables.

Las declaraciones tributarias sólo podrán ser examinadas por el propio sujeto pasivo, o a través de cualquier persona debidamente autorizada al efecto por aquél, en la Administración Tributaria y en las dependencias de la misma.

La reserva de información dispuesta en este artículo no le es aplicable a la Fiscalía General de la República y a los jueces, respecto de aquellos casos que estén conociendo judicialmente a quienes la Administración Tributaria deberá proporcionar la información que requieran en el cumplimiento de las atribuciones que les corresponden en la investigación de los delitos y en defensa de los intereses fiscales”. (Itálica suplida)

B. Así las cosas, corresponde ahora analizar las disposiciones legales antes señaladas en relación a lo argumentado por el ente obligado, en tanto consideran que el número de expediente no debe revelarse por estar amparado por el secreto fiscal.

En primer lugar, los apoderados del ente obligado citaron las disposiciones antes mencionadas, en complemento de la “Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda”, citada en la resolución impugnada, la cual establece lo siguiente: *“V.4.2 POLÍTICA Derecho de Acceso a la Información. [...] 2. Los Directores y Jefes de Unidades Organizativas serán responsables del contenido de la información que se conceda a los solicitantes, en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de acceso a datos personales, en cumplimiento lo dispuesto en la LAIP, su Reglamento, los lineamientos que emita el Instituto de Acceso a la Información Pública, los procedimientos, guías y otros instrumentos que emita la Unidad de Acceso a la Información Pública [...]”*.⁹

Al respecto, de la lectura del párrafo anterior, se advierte que dicha política no dispone nada diferente a lo ya regulado por la misma LAIP, su Reglamento y los Lineamientos emitidos por este Instituto; es más, el mismo ratifica el cumplimiento que debe dar la administración tributaria a dicha normativa.

Luego, en el informe de ley, manifestaron que en virtud de que el apelante estaba requiriendo información estadística, prepararían lo solicitado en tales términos. Posteriormente, durante la audiencia oral, si bien entregaron la mayoría de la información, mantuvieron el carácter de confidencialidad alegado respecto del “número de expediente de los procesos de fiscalización o determinación de impuestos, relacionados con impuesto sobre la Renta del ejercicio 2014 que se dejaron sin efecto en virtud del D.L. 127 del 26/09/18, publicado en el D.O. N° 182, Tomo N° 421 fecha 1/10/18”.

En esa misma línea, los apoderados de la **DGII** durante la audiencia oral señalaron que el revelar el número de expediente podría poner en riesgo la identidad de los contribuyentes entre otros datos no especificados, la cual se encuentra amparada por el secreto fiscal y sobre la cual media el guardar la reserva de la misma, según el Art. 28 del CT.

⁹ Ministerio de Hacienda, Manual de Políticas de Control Interno, Edición - 004, 2016, pág. 30. <https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/PMHDC9519.pdf>



Entonces, es pertinente mencionar que el mismo Art. 28 del CT en su inciso primero, parte final, establece que “...[p]or consiguiente, los empleados y funcionarios que por razón del ejercicio de sus cargos tengan conocimiento de la misma, sólo podrán utilizarla para el control, recaudación, determinación, emisión de traslados, devolución y administración de los tributos, y para efectos de informaciones estadísticas impersonales, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar” (itálicas y subrayado propios); es decir, que pese a la reserva mencionada, sí están facultados a brindar ciertos datos con fines estadísticos y que sean impersonales; lo cual fue confirmado por la representación del ente obligado durante la audiencia oral realizada para el presente caso (alegato final).

En ese orden, atendiendo a los términos estrictos en los que el apelante ha requerido la información, y tal como este lo ha manifestado a lo largo del procedimiento, el ciudadano no pretende conocer la identidad de los contribuyentes vinculados a los procesos en mención, sino únicamente el número de expediente, lo cual complementaría la información que ya le fue entregada por la **DGII**.

En ese sentido, este Instituto considera que la referencia o número de los expedientes no identifica a una persona, pues para considerarlo de esa manera, la información tendría que permitir determinar directa o indirectamente la identidad de la persona, siempre y que no requiera actividades desproporcionadas para conocerla. Esto último fue sugerido por la representación de la **DGII** al mencionar que existe un riesgo de que se pueda acceder a un dato personal, pero eso se concretaría si el apelante accede a los archivos donde se encuentran los expedientes, lo cual de acuerdo a las mismas declaraciones es imposible, pues solo personal autorizado de la institución lo puede realizar o que estos últimos puedan proporcionar esa información por medios ilícitos, lo cual es una mera especulación que, de darse, constituirán infracciones administrativas o ilícitos penales.

Por tanto, queda desvirtuado el argumento de la **DGII**, pues una referencia no es un dato personal, tampoco es otro tipo información privada que encaje en algunos de los supuestos del Art. 24 de la LAIP, sino es meramente un identificativo que ayuda a localizar de forma sistematizada los expedientes que contienen documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamento a la resolución definitiva, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

C. En tal sentido, analizados los argumentos expuestos por ambas partes a lo largo del presente procedimiento, a criterio de este Instituto, al entregarse la información relativa al **“número de expediente de los procesos de fiscalización o determinación de impuestos, relacionados con impuesto sobre la Renta del ejercicio 2014 que se dejaron sin efecto en virtud del D.L. 127 del 26/09/18, publicado en el D.O. N° 182, Tomo N° 421 fecha 1/10/18”**, no se revelaría de ninguna forma, la identidad de ninguno de los contribuyentes relacionados con dichos procesos, puesto que como bien se dejó claro durante la audiencia y como ya se relacionó con antelación, los sistemas que guardan toda la información relacionada con los contribuyentes solo se manejan a nivel interno de dicha entidad, por lo que solo los servidores públicos de la administración tributaria pueden tener acceso a estos, lo que limita fehacientemente un uso abusivo de este número de expediente por un tercero ajeno. Aunado a ello, el apelante manifestó no ser empleado del Ministerio de Hacienda, por lo que definitivamente no habría forma de que él lograra identificar o individualizar a los contribuyentes de dichos procesos únicamente con el número de expediente.

En ese sentido, los números de expedientes en mención, son información pública, pues tal como se ha expuesto anteriormente, estos no revelan por sí mismos el nombre de los contribuyentes (el cual sí estaría amparado por el secreto fiscal mencionado en el Art. 24 letra “d” de la LAIP), pues para obtener tales datos, se necesitaría hacer uso de otras maniobras desproporcionadas u acciones para identificar a un contribuyente, tal como ingresar a los sistemas mencionados para obtener otros datos personales o de carácter fiscal de estos, y como ya se mencionó, dichos sistemas solo son manejados a nivel interno por la administración tributaria y es su responsabilidad mantener la confidencialidad de los mismos.

En ese sentido, es procedente revocar la resolución del oficial de información de la **DGII**, en el sentido que debe entregarse “el número de expediente de los procesos de fiscalización o determinación de impuestos, relacionados con impuesto sobre la Renta del ejercicio 2014 que se dejaron sin efecto en virtud del D.L. 127 del 26/09/18, publicado en el D.O. N° 182, Tomo N° 421 fecha 1/10/18”, complementaria a la ya entregada por la **DGII** a lo largo de este procedimiento.



Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 2, 6, 85 y 86 de la Cn; 52 Inc. 3°, 58 letra “d”, 94, 96 letra “d” y 102 LAIP y 79 y 80 del RELAIP, a nombre de la República de El Salvador, este Instituto **RESUELVE:**

a) **Tener por sobreseído** el presente procedimiento de apelación respecto de la información referente al: “Informe de procesos de fiscalización o determinación de impuestos, relacionados con impuesto sobre la Renta del ejercicio 2014 que se dejaron sin efecto en virtud del D.L. 127 del 26/09/18, publicado en el D.O. N° 182, Tomo N° 421 fecha 1/10/18. El informe debe contener: [...] b) tipo de contribuyente; c) fecha de Resolución en la que se dejó sin efecto el proceso; y d) monto del impuesto complementario no determinado, por haber sido entregada al apelante **José Francisco Molina Guzmán** dentro del plazo concedido para tal efecto en la audiencia oral del presente procedimiento.

b) **Revocar** la resolución emitida por el oficial de información de la **Dirección General de Impuestos Internos**, de fecha 7 de mayo de 2019, sobre el punto específico que denegó el acceso a la información relativa al *“[...] número de expediente de los procesos de fiscalización o determinación de impuestos, relacionados con impuesto sobre la Renta del ejercicio 2014 que se dejaron sin efecto en virtud del D.L. 127 del 26/09/18, publicado en el D.O. N° 182, Tomo N° 421 fecha 1/10/18”*.

c) **Ordenar** a la **Dirección General de Impuestos Internos** que a través de su Oficial de Información, dentro del plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, proporcione a **José Francisco Molina Guzmán** el “número de expediente de los procesos de fiscalización o determinación de impuestos, relacionados con impuesto sobre la Renta del ejercicio 2014 que se dejaron sin efecto en virtud del D.L. 127 del 26/09/18, publicado en el D.O. N° 182, Tomo N° 421 fecha 1/10/18”, por ser información pública.

d) **Ordenar** a la **Dirección General de Impuestos Internos** que, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra c) de esta parte resolutive, el


cual incluya un Acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

e) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

f) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

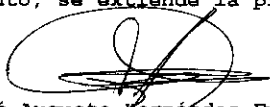
g) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

Notifíquese.-


PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

JH/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



